

Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que se ordenó dar cuenta según lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por la demandante Francisca Lepin Huinca, por sí y en representación de sus hijos Rodrigo, Juan Antonio, Gilberto, Braulio, Leoncio y Hugolina, todos de apellido Neculmán Leipin en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primera instancia que rechazó la demanda de adjudicación del derecho de goce en procedimiento especial indígena.

Segundo: Que el recurso denuncia que la sentencia de alzada vulneró los artículos 1 y 18 de la Ley N° 19.253 y 1317, 2304 y 2305 del Código Civil.

Sostiene la recurrente, que la sentencia infringe la normativa del mandato tácito y recíproco establecido para los herederos de una comunidad hereditaria, ya que lo que persiguen los demandantes es ejercer facultades conservativas respecto de una propiedad que era del causante – y del cual son herederos-, precisamente a través de la demanda de cese gratuito y asignación de goces, con el fin de que todos los herederos y cesionarios tengan un orden y claridad de la parte o cuota que les corresponde y así evitar el uso y abuso del predio común por parte de uno solo de los comuneros.

Tercero: Que en la sentencia se establecieron los siguientes hechos:

1.- Al fallecimiento de don Osvaldo Neculman, la sucesión indivisa compuesta por don José Gilberto, doña María Idelina y doña Basilia, todos Neculman Venegas, pasó a ser dueña de la Higuera N° 25, de cinco hectáreas, de la ex-comunidad Indígena Ignacio Neculman, ubicada en el lugar Boroa, comuna de Freire, hoy comuna de Nueva Imperial. De acuerdo con sus títulos, los deslindes especiales del inmueble son: Norte, una línea recta que separa de los terrenos de la higuera 16, de doña Carmen Zúñiga Curihual; Este, cauce actual del Estero Boroa, que separa de terrenos de propiedad de doña Rosy Recondo; Sur, dos líneas que separan de terrenos de las hijuelas 28 y 26, de don José Manuel Neculman Loncón y de doña Fenara Neculman Zúñiga; Oeste, línea recta y camino público, que separan de terrenos de las hijuelas 26



de doña Fenera Neculman Zúñiga, 13, 14 y 15, de doña Aurora Barra Grandón, de doña Felicia Neculman Zúñiga y de doña Angelina Neculman Venegas.

2.- Doña María Idelina y doña Basilia Neculman Venegas cedieron todos sus derechos hereditarios a doña Herminda Zúñiga Neculman, como consta en inscripción rolante a fojas 921 vuelta N° 1231 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 2004.

3.- El 04 de septiembre de 2004 falleció intestado don José Jilberto Neculman Venegas. La posesión efectiva de la herencia se concedió a sus hijos Rodrigo, Leoncio, Hugolina, Gilberto, Juan Antonio y Braulio, todos Neculman Lepin, y a doña Francisca Lepin Huinca, como cónyuge sobreviviente del causante. Los herederos sucedieron al causante en el dominio de la Higuera N° 25, de cinco hectáreas, de la Ex comunidad Indígena Ignacio Neculman, ubicada en el lugar Boroa, comuna de Freire, hoy comuna de Nueva Imperial, encontrándose el dominio anterior inscrito a fojas 495 vuelta N° 755 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de dicha comuna del año 2003.

4.- El 19 de mayo de 2021, personal de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, correspondiente a la encargada (S) de la Oficina Técnica doña Pamela Hermosilla Cordero y a la topógrafa doña Elena Sepúlveda se constituyeron en la Higuera N° 25, ya señalada, encontrándose con doña Francisca Lepin y dos de sus hijos, quienes manifestaron que se conformaban con el proyecto de asignación de lotes del que daba cuenta el informe emitido por dicha institución.

Sobre la base de tales hechos, la judicatura de fondo estimó que no se acreditaron los supuestos de la acción ejercida, al determinar que *«...la actora acreditó la existencia de comunidad habida entre las partes, por cuanto los litigantes tienen derechos, acciones o cuotas sobre la cosa común, esto es, la mentada Higuera N° 25, de cinco hectáreas de superficie, de la Ex Comunidad Indígena Ignacio Neculman, ubicada en el lugar Boroa, comuna de Freire hoy comuna de Nueva Imperial, las que adquirieron, en el caso de la parte demandante, por transmisión en la sucesión intestada quedada al fallecimiento del causante don José Jilberto Neculman Venegas, el que a su vez era heredero del fallecido don Osvaldo Neculman, cuya sucesión hereditaria estaba*



compuesta por don José Jilberto, doña María Idelina y doña Basilia Neculman Venegas, habiendo adquirido la demandada mediante cesión de derechos hereditarios todos los derechos que les correspondían a doña María Idelina y doña Basilia Neculman Venegas en la herencia quedada al fallecimiento de don Osvaldo Neculman, siendo el bien que compone la comunidad, precisamente, la referida Higuera N° 25.-

(...) Que además de lo indicado en el considerando precedente, la parte demandante igualmente debía demostrar que la demandada efectuó el uso y goce gratuito de la cosa común consistente en la señalada Higuera N° 25, lo que no hizo, por cuanto ninguna probanza rindió con la que se acredite plenamente que esta última efectuó un uso y goce exclusivo y excluyente de dicho inmueble mediante la celebración de un contrato de arrendamiento con un tercero, aprovechándose de los frutos (civiles) del mismo. En efecto, si bien, en el informe emitido por CONADI, referido en el motivo 5º), se indica que personal de dicha institución se constituyó en los terrenos de la higuera N° 25, en el que se entrevistaron con la actora y dos de sus hijos, lugar en el que “[...] se encontró una construcción de vivienda que pertenece al nieto de la señora Herminda Zúñiga Neculman”, tal afirmación emana de dichos de la demandante doña Francisca Lepin no corroborados con otras piezas de convicción allegadas al presente juicio, por cuanto, ni siquiera se citó a la demandada a absolver posiciones, como para poder establecer estos extremos de la acción a través de esta probanza, todo lo cual impide establecer que la demandada efectuó un uso y goce exclusivo y excluyente del bien raíz referido, en desmedro de los derechos de los demás participantes en la comunidad, todo lo cual lleva a concluir que la demanda no podrá prosperar...».

Cuarto: Que, con apego a lo expuesto, parece pertinente tener en cuenta que sólo los tribunales del fondo se encuentran facultados para determinar los hechos del litigio y que, efectuada dicha labor con sujeción a las denominadas normas reguladoras de la prueba, se tornan inalterables para este tribunal de casación, con arreglo al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza, a menos que se denuncie eficazmente y se acredite la



infracción de las referidas disposiciones, cuestión que no ha ocurrido en la especie.

Quinto: Que, de la lectura del recurso, resulta evidente que lo reprochado es una desavenencia entre la estimación de los recurrentes acerca de cómo debía ponderarse la prueba rendida en el juicio, en relación a la determinación del ejercicio del uso y goce gratuito de la cosa común por parte de la demandada, y la argumentación desarrollada en la sentencia como consecuencia de la prueba aportada, pareciendo insuficiente el reproche que encierra la exigencia de una nueva valoración de la prueba rendida en el proceso, según su particular apreciación; razón que lleva a concluir que el recurso presentado adolece de manifiesta falta de fundamento que autoriza su desestimación en la presente etapa procesal.

Por estas consideraciones, y normas citadas, se **rechaza** el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia de uno de abril de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Regístrese y devuélvase.

N°12.374-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., y el abogado integrante señor Eduardo Morales R. No firma el Ministro señor Blanco y el abogado integrante señor Morales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintidós.





Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintidós de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

